

PROPUESTA AL XXIX CONGRESO GENERAL ORDINARIO DEL STUNAM

POR LA CORRIENTE ROJA FRENTE FLORES MAGON

POLITICA NACIONAL

POR UNA SALIDA DEMOCRÁTICA A LA CRISIS, DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS TRABAJADORES

La economía global está en riesgo de experimentar una nueva depresión. Ante la endeble recuperación en los países desarrollados y la desaceleración del crecimiento de las economías emergentes, la actual etapa es de lento e inestable crecimiento. La economía estadounidense se estanca, los riesgos de ese débil crecimiento están en que dicha economía no despegue y no puede crear los empleos necesarios ni para recobrar los indicadores económicos antes de la crisis ni para absorber a las personas que se incorporan al mercado.

En Europa, la crisis de la deuda fiscal de Grecia, España, Portugal, Irlanda y la amenaza en Bélgica, se difunde por toda la Unión Europea. Los organismos financieros internacionales; como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y los grandes bancos, exigen a los gobiernos la búsqueda de excedentes fiscales mediante el desmantelamiento del sistema de seguridad social; el recorte a los programas pensiones y jubilaciones, de asistencia sanitaria, educación y otros gastos sociales. Desde una perspectiva neoliberal se trata de aprovechar la crisis para profundizar las reformas económicas estructurales del mercado laboral, de los sistemas de pensiones y jubilaciones y de los servicios públicos; es decir, la contracción del mercado interno y la disminución de los derechos laborales individuales y colectivos.

La amenaza de una tercera depresión está a la vista: hay problemas de consumo y el empleo no ha repuntado; además, en estas economías se está considerando un retiro de los apoyos a la economía y los estímulos fiscales.

Frente a este contexto internacional poco favorable, en el que destacan un menor crecimiento de la economía estadounidense, incertidumbre y ajuste en algunas economías europeas y mayor volatilidad en los mercados internacionales, México crecerá por debajo del promedio de América Latina, en el reciente informe de la CEPAL, se señala que nuestro país sufrió la mayor caída del producto interno bruto de la región durante la crisis de 2009; en 2010 el crecimiento estará por debajo del promedio de las economías latinoamericanas; lo que ha ocasionado que México se encuentre entre los primeros

lugares de desigualdad en el ingreso, agudizándose la extrema pobreza y quedando, por tanto, a la zaga de los países más desarrollados de la OCDE.

La política económica impulsada por el gobierno de Felipe Calderón apunta al fortalecimiento de la acumulación de capital, vía la profundización de las reformas estructurales y un rediseño del sector público consistente en transferir la mayoría de los instrumentos de la acción pública al libre juego de las fuerzas del mercado, sin crear los mecanismos para regular el tránsito del proteccionismo a la globalización, lo que incrementa la vulnerabilidad y dependencia económica de nuestro país.

Adicionalmente, la crisis fiscal se agudiza con la crisis económica. Los ingresos públicos se han reducido drásticamente como consecuencia de la exención de gravámenes al comercio exterior, a las transacciones financieras, los impuestos directos al capital financiero, a la gran empresa y a las personas con mayores recursos. El IVA y otras cargas fiscales indirectas no han podido compensar las pérdidas recaudatorias acentuadas por el menor crecimiento económico, el desempleo, la evasión y la elusión fiscal.

El paquete de contrarreformas -energética, laboral y de la seguridad social-, que el gobierno panista ha presentado bajo el disfraz de impulso a la competitividad y la productividad, pretende encubrir la participación de la iniciativa privada por la vía de contratos de servicios y licitaciones a modo, como las del espacio radioeléctrico, así como la disminución de los costos laborales a través de conculcar los derechos y prestaciones de los trabajadores, cuyo objetivo es la obtención de una mayor tasa de ganancia al gran capital y a sus empresas.

Por esta razón, hoy buscan nuevamente reducir el sistema público de pensiones, por medio de la Suprema Corte de Justicia, para que el sistema privado tenga cada vez más espacio en el mercado; es decir, menos competitividad y más especulación.

La jurisprudencia emitida en días anteriores al reducir el tope de 25 a 10 SM, las pensiones, jubilaciones, seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, representa una confiscación de los derechos adquiridos de los trabajadores mexicanos.

Dicha resolución, realizada en sesión privada y adoptada en condiciones de opacidad y discrecionalidad, significa la legalización de un despojo a los trabajadores y el derecho a una jubilación digna, profundiza la precarización de las condiciones laborales y del bienestar social y contribuye a profundizar la desconfianza y el descrédito en las instituciones de procuración de justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha convertido en una instancia legalizadora y legitimadora de atropellos y en una fuente de perjuicios a los intereses de los trabajadores y demás sectores de la población.

Ante el fracaso de la estrategia militar para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, queda de manifiesto la incompetencia del gobierno para cumplir con la más elemental de sus funciones: brindar seguridad a los ciudadanos. A cambio, recurre a la coartada de los llamados a la Unidad Nacional, que no son más que proclamas demagógicas en torno a supuestas propuestas de Estado, mediante el diálogo nacional, excluyendo a los ciudadanos todo con tal de mantener el mismo régimen político.

La inseguridad, que ha sido planteada de manera unilateral, parcial y sesgada, es también consecuencia de la crisis económica y el desempleo en el campo y la ciudad, que orilla a miles de personas a involucrarse en actividades delictivas. Es también resultado de las estructuras de poder existentes que dejan a los ciudadanos en un estado de indefensión. La solución no puede reducirse a un asunto de fuerza pública. La seguridad humana consiste en garantizar a los ciudadanos los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales es por lo tanto un asunto de desarrollo social.

Los efectos de la violencia y la inseguridad acrecientan la desigualdad y afectan a la población económicamente más vulnerable: no sólo mujeres y jóvenes, si no todos aquellos que no cuentan con los recursos económicos necesarios para protegerse. La experiencia demuestra que la violencia no se combate con una estrategia militar, sino con una política económica y social encaminada a la creación de una sociedad equitativa, justa y solidaria.

También hay que destacar el clima de polarización y degradación política que rodeó los recientes procesos electorales y el bochornoso espectáculo de las campañas sucias. Al uso y dispendio de recursos públicos para fines electorales, los programas para inducir el voto ciudadano, el desvío de recursos públicos para someter y manipular a los medios locales, el espionaje telefónico y la intimidación judicial, el asesinato de candidatos a cargos de elección popular, así como a periodistas. Estos hechos son reveladores de la acción de grupos que, al amparo de la incapacidad y debilidad gubernamental, buscan imponer sus condiciones a la sociedad recurriendo, incluso, al chantaje y la violencia de corte terrorista.

El IFE confirma la intromisión ilegal del presidente y de su protagonismo electoral en las elecciones del pasado 4 de julio: Felipe Calderón rompió el principio de equidad y actuó como presidente del PAN y no como el Presidente de la Nación. El TRIFE debe actuar con celeridad para sancionar los actos que atentan contra la legalidad electoral.

La ruta electoral debe fortalecerse como la vía legítima y reconocida para llegar al poder. El voto se ejerce con una libertad considerable; los ciudadanos eligen entre opciones de gobierno diferentes; los partidos políticos, cuestionados y con crisis internas evidentes por el divisionismo y poca visibilidad programática de sus propuestas, realizaron alianzas pragmáticas que los han desdibujado ideológica y políticamente. No obstante, en nuestro país existe la posibilidad de lograr cambios por la vía electoral. Si lo decide la voluntad

ciudadana los cambios en el país son posibles. La voz de la mayoría ciudadana puede y debe imponerse.

A su vez, la recomposición del gabinete presidencial tiene más una intención de futurismo electoral que de gobernabilidad. Además, dichos cambios amplían las funciones de Calderón, atentan contra el equilibrio de los poderes de la Nación y lo hacen ver como operador electoral y no como jefe de Estado.

La convocatoria a la Unidad Nacional, como una propuesta presidencial, es una demanda de apoyo a sus actuales políticas, con la cual Calderón pretende lograr legitimidad.

En México hay una sensación de frustración e incertidumbre. Es evidente que el vacío de poder, la corrupción y la impunidad son producto del debilitamiento de las instituciones, principalmente del Poder Ejecutivo, y la irrupción de los poderes fácticos que atentan contra la gobernabilidad y la democracia, poniendo en entredicho al estado de derecho. La crisis económica en curso no podrá resolverse con la exclusión de la sociedad. Al contrario, es probable que derive en una crisis política y social, como consecuencia del vacío de poder generado desde la misma cúpula de la estructura de poder y de la insensibilidad a las demandas y necesidades de la mayoría de los ciudadanos.

Por lo tanto, la cuestión central en la coyuntura actual gira nuevamente en torno dos alternativas: la primera, basada en el mantenimiento y profundización de la actual política económica neoliberal que supone un proyecto de subordinación del país a los intereses y hegemonía de los organismos financieros internacionales y nacionales; y la segunda —nuestra propuesta—, que consiste en construir una salida democrática a la actual crisis, a partir del interés mayoritario de los mexicanos y de un proceso social ciudadano encaminado a un nuevo pacto social para cambiar el rumbo económico y político del país.

Es innegable que la amplitud y profundidad de la actual crisis continúa golpeando a los trabajadores, sobre todo porque de nueva cuenta se está imponiendo desde la derecha una restauración autoritaria a partir de los poderes fácticos asociados al gran capital. La estrategia consiste en el rescate de los consorcios financieros y bancarios con enormes sumas de dinero público para salvaguardar la liquidez del sistema y para que se recuperen las bolsas de valores, evitando la quiebra de dichas corporaciones.

Pero hoy por hoy la disputa no sólo es económica, es también de orden político y cultural. Por ello, para salir de esta crisis debemos reivindicar la importancia de los principios, los valores, la ética y el compromiso social no sólo de la política, sino también de la educación y la cultura. Esto se vuelve necesario para impulsar la democratización real del régimen político y de la toma de decisiones en todas las esferas de la vida, para generar una economía política con equidad y justicia social, empleo digno, salario remunerador y bienestar social, con pleno respeto de las libertades y los derechos humanos.

El problema radica en que en la actual recesión no estamos logrando cambiar la correlación de fuerzas que impulse los cambios de orientación política para reactivar al sector productivo. En consecuencia, se mantienen la contracción de la economía real; la debilidad del mercado interno y los salarios, y el crecimiento desmesurado del desempleo, la pobreza y la miseria, lo cual generará una crisis de mayores dimensiones que puede desembocar en un estallido social.

Así, ante la encrucijada que enfrentamos, se requiere en primer lugar de profundizar la lucha social de los trabajadores de la ciudad y el campo y, en ese ambiente, promover un profundo debate de las ideas, de las propuestas y de los proyectos, con la más amplia participación democrática y plural de todos y todas, sin exclusiones de ninguna índole, para avanzar en la redefinición de un nuevo modelo de desarrollo de carácter estratégico con una visión de Estado.

El sindicalismo debe mantener la iniciativa y las propuestas políticas para, en todo momento, estar a la altura de los retos y desafíos que demanda la problemática social generada por la política neoliberal. En el plano interno, es indispensable seguir fortaleciendo nuestro quehacer sindical a partir de la profesionalización del trabajo político-sindical en los ámbitos del sindicalismo universitario y del movimiento obrero; asimismo, debemos actualizar continuamente las estrategias de lucha, el discurso político y los instrumentos de movilización, involucrando permanentemente a las bases para blindar a nuestra organización ante los embates de la actual política anti laboral del gobierno federal.

En el ámbito del sindicalismo nacional cobra mayor relevancia la lucha del STUNAM y de la UNT, apoyada en su proyecto de Reforma Social y Democrática del Estado. La primera dimensión política de dicho planteamiento establece la construcción de una nueva relación entre el Estado, la sociedad y la economía. Dicha reforma política implica promover una profunda democratización del régimen político y la reconstrucción del aparato institucional, para establecer nuevas reglas y tomar decisiones mucho más democráticas. En un segundo momento se pondrán a debate las reformas vinculadas con la reestructuración del sistema económico, para incentivar su modernización y el eslabonamiento de las cadenas productivas, redefinir la política económica orientada hacia una nueva estrategia industrial y modificar el papel del Estado, junto con sus mecanismos de intervención y regulación de los mercados, así como el diseño de políticas públicas.

Finalmente, se impulsarán las reformas sectoriales tales como la educación, la ciencia y la tecnología, el sector laboral, la salud y la seguridad social. Esta es la ruta crítica de las transformaciones que desde el STUNAM y la UNT se plantean a partir de la jerarquización de las prioridades nacionales del nuevo modelo de desarrollo que el país requiere, en la perspectiva de cristalizar una salida democrática a la crisis

La convergencia de los movimientos sociales, campesinos y sindicales, expresada en el Movimiento por la Soberanía, las Libertades Democráticas y los Derechos de los Trabajadores, impulsora de la unidad en la lucha social y en la acción política, significa una inmensa posibilidad, un potencial de la alianza clasista como detonador del cambio social profundo ante los retos planteados por la actual crisis.

Dichos desafíos consisten, entre otros aspectos, en la urgencia de reencauzar las expectativas de todos los sectores de la sociedad a partir de nuevas formas de hacer política; en la reinserción de la sociedad en la política a partir de los ciudadanos y de la sociedad misma; en una ciudadanía activa y crítica; en un sindicalismo capaz de renovarse en la acción social, la solidaridad y el interés colectivo para ampliar los ámbitos de la deliberación pública; en la ética, el compromiso social de lo político y la congruencia entre el discurso y la acción política, poniendo en el centro de la agenda nacional la cuestión social, el cuidado del medio ambiente, los salarios, el desempleo, la pobreza, la violencia, la falta de libertades, la violación de los derechos humanos y el combate de la desigualdad y la exclusión social.

Los trabajadores universitarios estamos comprometidos a redoblar esfuerzos para construir una fuerza política propia, capaz de enfrentar los retos y desafíos para transitar de nuestro ámbito local hacia uno más general, rescatando nuestra identidad sindical construida a lo largo de las últimas décadas, misma que está basada en la movilización, la congruencia y la propuesta política, la solidaridad, el internacionalismo y nuestra inserción en la vida política nacional en defensa de los intereses y derechos históricos de la clase obrera. Esto implica no quedarnos en las luchas inmediatas y priorizar la lucha política de largo plazo, evitando el gremialismo y el pragmatismo, centrando nuestros esfuerzos en la constitución de una fuerza político social de carácter nacional que impulse la opción sindical democrática e independiente, así como el fortalecimiento de la universidad pública.

Nuestro sindicato se ha consolidado como una opción real para los trabajadores universitarios, a partir de que ha institucionalizado su vida interna sindical con una amplia participación democrática en todas las instancias de dirección, en las que se incluye la representación proporcional de las minorías con el método del voto directo, secreto y universal en todos los procesos de toma de decisiones, la rendición de cuentas, la transparencia, priorizando la toma de acuerdos a partir del consenso y la realización permanente de las sesiones del Consejo General de Representantes y de los Congresos Generales, instancias máximas de dirección política.

También se puede contar entre nuestro logros la conquista de un Contrato Colectivo de Trabajo que permite la relación bilateral, la estabilidad y el ejercicio de los derechos en materia laboral así como el desarrollo de los trabajadores a través del tabulador, con movimientos horizontal y vertical, la capacitación, los estímulos económicos por calidad y eficiencia, el retiro digno y la carrera administrativa universitaria.

Sin dejar de reconocer estos avances, es necesario asumir que con el paso del tiempo nos hemos rezagado en la tan necesaria capacitación político-sindical de los afiliados y la formación de los cuadros políticos. En consecuencia, la renovación y debates de proyectos nacionales y de las ideas del cambio social no se han actualizado como quisiéramos, ante lo cual debemos impulsar la deliberación social en torno a los grandes problemas nacionales e impulsar una reflexión nacional acerca de la Refundación de la Nación a partir de un Nuevo Pacto Social que impulse la Reforma Integral Social y Democrática del Estado. Para tal efecto promoveremos una activa participación del sindicalismo nacional.

Dado el abandono de la cultura, la educación y la investigación en nuestro país y la creciente dependencia científica y tecnológica, exigimos el aumento al presupuesto educativo con carácter progresivo y multianual, el impulso a los proyectos de investigación que se realizan en todos los centros de investigación y docencia. Demandamos el cumplimiento irrestricto del artículo tercero constitucional a fin de fortalecer a la educación pública, gratuita, laica, científica y popular. Así como evitar el desvío de recursos públicos a hacia el sector educativo privado.

Por otra parte, si bien es cierto que el STUNAM surgió como sindicato de institución, representando a los trabajadores administrativos y académicos, hoy debemos aceptar que las políticas y acciones de las administraciones en turno, los métodos autoritarios, la presencia de una organización que suplanta la libre representación sindical y la coacción a los trabajadores académicos, han impedido la libertad de sindicalización del sector académico y la consecución de sus derechos y estabilidad laboral, por lo que se hace indispensable redoblar los esfuerzos y las acciones del STUNAM para organizar la comunidad universitaria, principalmente a los académicos, en pos de la defensa real de sus derechos académico-laborales, particularmente en el desarrollo de la carrera académica, fomentando el merecido estímulo y reconocimiento a su labor docente y de investigación.

Para revertir esta situación, nuestro sindicato debe asumir la tarea de la renovación y actualización sindical de forma permanente y el impulso a una gestión sindical ética y comprometida, así como fortalecer su unidad interna, como divisas para relanzar a nuestra organización sindical y, de esta manera, transformarla acorde con un nuevo proyecto de universidad y de país. De no hacerlo corremos el riesgo de dejar de representar los nuevos intereses de los trabajadores y de marginarnos de la vida política sindical, debilitando los principios que nos dieron origen y sustento, desvirtuando al sindicalismo democrático, lo que podría volvernos presa fácil de la política anti laboral del gobierno en turno. Lo acontecido al SME debe llamarnos a la reflexión.

Esta crisis que ahoga al país es una oportunidad para asumir los retos y desafíos y continuar con las luchas históricas de los trabajadores por sus reivindicaciones y derechos para lograr la justicia, la equidad social y la emancipación de la clase obrera. Por lo que

impulsaremos la ampliación del Movimiento por la Soberanía hasta alcanzar la constitución de un **Frente Social y Político Amplio, por la Equidad, la Democracia Parlamentaria, el Desarrollo y los Derechos Humanos**, que refleje la pluralidad de los movimientos en lucha de nuestro país y que se pueda constituir en la base social de un Gobierno de Coalición orientado hacia la Concertación de un nuevo Régimen Social y Democrático

La lucha actual es, en principio, de los sindicatos; sin embargo, debido a la fragmentación del mundo del trabajo y del movimiento sindical, para que tenga posibilidad de triunfar se vuelve indispensable construir una gran convergencia, una alianza estratégica de corte tanto clasista como ciudadano con la mayoría de los movimientos sociales, feministas, juveniles, campesinos, indígenas, de consumidores, de derechos humanos y medioambientalistas. Así como los movimientos contra el racismo, la xenofobia, la homofobia y la violencia contra los inmigrantes. Toda vez que la crisis afecta a todos, porque todos somos trabajadores.

La experiencia de lucha de los últimos años nos dice que hoy los movimientos y las organizaciones sociales de todo nuestro país —locales, estatales y regionales— deberían articularse para construir un gran frente social capaz de detener la actual política económica que privilegia al sector financiero en detrimento de la economía real de carácter productivo, del salario, el empleo, de los derechos y prestaciones de los trabajadores del campo y la ciudad y ser capaz de cuestionar y modificar la orientación de las políticas que atentan contra el desarrollo, la democracia, los derechos y que, en consecuencia, profundizan la desigualdad.

Este movimiento tendrá como uno de sus pilares la lucha por la democratización de todos los órdenes de la vida política, el fortalecimiento de las instituciones representativas y el Estado de Derecho, para enfrentar la voracidad de los mercados; limitar la presencia política en las decisiones del Estado de los poderes no electos democráticamente, tales como Banco de México, organismo reguladores capturados por los monopolios, Cofetel, Cofemer, así como la dudosa legalidad de las resoluciones de la SCJN, por sus implicaciones políticas y sociales; limitar el poder del Ejecutivo y reforzar al Congreso de la Unión; frenar la interferencia del poder económico de los consorcios y monopolios internacionales y nacionales sobre el poder político; es decir, luchar por democratizar la gestión económica e incidir en los centros de poder ante el vacío institucional que cubren los poderes fácticos imponiendo sus reglas del juego en las decisiones democráticas que atañen a la sociedad civil.

El **Frente Social Amplio** impulsará, a partir de la pluralidad, un proceso unitario para desarrollar una lucha de carácter nacional con base en tres estrategias: movilización social, propuesta política y cabildeo político.

Para lo anterior será necesario promover una convocatoria de carácter nacional para:

- i) Replantearse una estrategia de articulación con diversas organizaciones, que parta de los alcances del Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria, Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas, y que se proponga su ampliación, que incluso plantee una reformulación de su identidad, a partir de los movimientos regionales;
- ii) Un planteamiento programático sólido, producto de la discusión de alto nivel, que pueda promover y ampliar la perspectiva de un movimiento político a partir de la alianza con nuevos sectores que hasta ahora no participan en nuestro movimiento;
- iii) Una estrategia de posicionamiento ante la opinión pública;
- iv) Una estructura que dé eficacia y continuidad a las estrategias de lucha;
- v) Una estrategia de alianza y solidaridad con nuestros pares en el ámbito internacional;
- vi) Una discusión a fondo que establezca la convergencia de los movimientos, construya los puentes de confianza y los acuerdos políticos para desarrollar la unidad de acción.

Demandas de carácter general:

1. Aumento salarial de emergencia.
2. Reforma Hacendaria Integral. Disminución de impuestos al trabajo y al sector productivo nacional (IVA, IETU, ISR).
3. Alto al aumento de las tarifas de servicios (luz, gasolina, diesel, gas domestico y teléfonos).
4. Generación de empleos dignos y bien remunerados en el campo y la ciudad.
5. Garantizar la seguridad de toda la población, el respeto irrestricto a los derechos constitucionales: laborales, humanos, económicos, sociales, culturales y medioambientales.
6. Impulsar un nuevo modelo de desarrollo rural para asegurar la soberanía alimentaria
7. Recuperación productiva del campo mexicano, con impulso prioritario a los pequeños y medianos productores.

8. Por la defensa de la contratación colectiva, la bilateralidad, la autonomía y las libertades sindicales.
9. Respeto al derecho a una jubilación digna.
10. Ampliar la participación ciudadana, acabar con el monopolio de los partidos políticos en el quehacer político, impulsar la agenda social, las coaliciones de carácter programático, las candidaturas ciudadanas y establecer gobiernos de concertación democrática.
11. Reforma integral del sistema judicial; autonomía y saneamiento de las instituciones impartidoras de justicia a fin de desterrar la corrupción, la impunidad y el tráfico de influencias.
12. Fortalecimiento de la educación, ampliación presupuestal y de los espacios educativos a toda la población.
13. Una política social universal con perspectiva de género y de realización de los derechos humanos.
14. Fortalecimiento y reconocimiento de la diversidad.
15. Constitución del Consejo Económico y Social

Atentamente

Agosto de 2010

Comisión Política de la Corriente Roja Frente Flores Magón